
LA MODERNIZACIÓN SOCIAL COMO MITO

Félix Ortega

Los procesos que ha originado la modernización social en la mayor parte de los denominados “países desarrollados”, han tenido una larga duración. El cambio social se ha caracterizado por la acumulación gradual de transformaciones. Se han tratado, por lo general, de modificaciones introducidas a partir de cambios precedentes, que han permitido su sedimentación e integración en la estructura social de un modo bastante ordenado. Ello, por supuesto, no excluye conflictos y tensiones, ni tampoco etapas de rápidas y aceleradas mutaciones. Pero éstas, cuando se daban, solían ser la salida lógica y casi natural a los problemas generados con anterioridad y que no podían resolverse por medio de pequeños arreglos. La respuesta que estos cambios acelerados proporcionaban no solía divergir o contradecir la orientación de progreso seguida con anterioridad, sino que venía a continuarla por otros medios. Sin caer por ello en evolucionismo lineal alguno, conviene subrayar que el cambio en estos casos era, más que una ruptura con las conquistas previas, su prolongación, sólo que a un nivel más perfeccionado.

Muy diferente es el caso de aquellas sociedades que se han enfrentado a la Modernidad con actitudes cambiantes y contradictorias, generando procesos de retroceso más amplios que los de avance. Tal ha acontecido con la sociedad española. Pionera de la Modernidad, acaba por ser uno de los últimos bastiones de su entorno geográfico y cultural en hacerla realidad. Durante más de cuatro siglos, la de España es una historia de cortos progresos y grandes repliegues involutivos. De manera que, sumida en convulsiones y orientaciones encontradas, la sociedad vivirá

a caballo entre dos mitos, ambos igualmente ilusorios: el del *pasado glorioso*, emblema de todos los conservadurismos triunfantes, y el de la *modernidad por venir*, lema animador de cuantos movimientos progresistas han surgido entre nosotros. Todavía hoy, si bien bajo circunstancias económicas y políticas distintas a las del pasado, siguen emergiendo los dos discursos: la campaña electoral de 1993 ha estado plagada de ellos. La modernización en la sociedad española se hace tardíamente, con un ritmo más acelerado que en otras partes, con lo que las transformaciones difícilmente eran asimilables por el cuerpo social.

Esta diversidad de ritmos en los procesos de modernización produce, indudablemente, efectos sociales muy diversos. La gradación, en unos casos, permite la consolidación coherente de los logros. Los vaivenes, cambios de rumbo y rápidas aceleraciones provoca, en otros, desajustes y una cierta incapacidad de organizar en un todo equilibrado las innovaciones sociales. Hay, en este último tipo de sociedad, un claro impulso a fagocitar los cambios, que se vuelven rápidamente obsoletos y carentes de atracción. El ritmo de la modernidad se acelera hasta el punto que nada llega a hacerse sólido; todo se diluye anticipadamente, antes de darle tiempo a estabilizarse. Se destruye cuanto se construye e incluso, a veces, antes de construir. Es un continuo tejer y destejer la trama social.

La peculiaridad de este proceso requiere un análisis meticuloso del mismo. Primero porque nos permitirá comprender mejor a la sociedad española y las imágenes que durante los últimos tiempos ha proyectado de sí misma: su juventud, su dinamismo, su expansivo crecimiento, su euforia vital; pero también su proclividad al rápido cuarteamiento y desplome. Segundo, porque puede contribuir a explicar mejor las dificultades que presenta la implantación de la modernización en otros contextos sociales. Y tercero, porque estaremos en condiciones de entender mejor la naturaleza de la modernización, al comprobar que ésta es algo más que una ilusión y por lo tanto exige actitudes y valores congruentes con ella.

Un paso adelante, dos atrás

El amplio periodo histórico que comienza en la constitución del Estado nacional en el arranque de la Epoca Moderna y nos lleva a la década de los ochenta del siglo actual, es para España una secuencia de aconteci-

mientos en donde cada avance, cada innovación se sigue de una reacción de signo contrario de duración más larga. Todo cambio se ha visto entre nosotros, durante bastante tiempo, como un *peligro* para las esencias patrias. El riesgo de innovar consistía, por tanto, en destruir unas supuestas conquistas inmutables identificadas con el espíritu nacional. De ahí que la mayoría de los cambios sociales se hayan dado *a la contra*: en oposición a los proyectos que pretendían hacer realidad el progreso. Al oponerse a ellos, las reacciones conservadoras no podían volver, sin más, a ese pasado mítico: tenían también ellas que transformar la realidad, aunque no fuere más que para acabar con las conquistas alcanzadas por los movimientos innovadores. De este modo, no pocas transformaciones se han producido como funciones latentes, como *consecuencias no queridas*, y por tanto *no dirigidas ni controladas*, de políticas profundamente conservadoras.

El resultado de un cambio de este tipo no podía ser otro que la *discontinuidad* y la *inestabilidad*, bajo la apariencia de un férreo orden, de la vida social. Ésta se veía sometida a movimientos pendulares, sacudida por impulsos dirigidos en sentidos opuestos. Difícilmente, en estas condiciones, podían institucionalizarse formas nuevas de organización. Antes al contrario, cada empeño por hacerlo contaba con la respuesta que las neutralizaba. Con lo que los problemas se volvían crónicos, ya que no se solucionaban por que no se reconocían. Y cuando se conseguía hacerlo, prontamente se desandaba el camino recorrido. Las cuestiones pendientes se fijaron en la estructura social: eran siempre las mismas, y cada vez que se trata de abordarlas había que empezar *ex novo*. La historia era un constante retorno.

Ahora bien, durante los periodos en los que el cambio modernizador era posible, al tener conciencia de lo excepcional del momento y la necesidad de actuar prontamente para no desaprovechar una oportunidad que tal vez no volviera a presentarse durante mucho tiempo, se pretendía cambiarlo todo rápidamente. Era frecuente, además que estos proyectos se acometieran no precisamente bajo las mejores condiciones históricas y sociales; casi siempre eran momentos en que el conservadurismo imperante, desbordado por la crisis y los conflictos, se retirara del poder. Con la instalación de otra autoridad progresista, las esperanzas de cambio se disparaban hasta el infinito: se confiaba que todos los problemas se resolverían a la vez y aceleradamente. Con lo que invertir la tendencia anterior, remodelar a fondo la organización social, contando para ello

con suficiente consenso social, disponer de la capacidad para afrontar intelectual y políticamente la empresa, y todo ello llevarlo a cabo a un ritmo vivaz, hacía del proyecto poco menos que inviable. El apresuramiento de los cambios emprendidos en este país ha chocado, en cuantas ocasiones ha habido lugar, con resistencias o falta de apoyos que las élites dirigentes no valoraron suficientemente. En una sociedad habituada a largos procesos de tradicionalismo, las innovaciones apresuradas generaban no pocas frustraciones, que conducían a estallidos sociales imposibles de encauzar.

Precisamente por la excepcionalidad de las fases de modernización, éstas se acometían allí donde era factible hacerlo, a veces cuando era poco aconsejable hacerlo, y sin contar con la adecuada cooperación de aquellos factores sociales que las favorecieran. Ha sido frecuente iniciar decididos proyectos de modernización política en contextos de quiebra internacional de los sistemas democráticos y, además, en momentos de grave recesión económica: la II República es el ejemplo más ilustrativo. Esta *asincronía* llevaba a estrangular los cambios, al exacerbar los problemas por los desequilibrios existentes entre los diversos subsistemas. Con el resultado añadido de hacer buena la conservadora tesis de la perversidad (Hirschman, 1991), que contribuía a legitimar la destrucción de los proyectos progresistas y el retorno a políticas reaccionarias.

La historia de la sociedad española ha venido siendo, por tanto, divergente de la de los países de su entorno. Este *rezago* que nos alejaba de la modernidad tenía otras consecuencias relevantes. La primera, la desconfianza en la voluntad y capacidad endógenas de nuestra sociedad para hacer posible el progreso. Las diversas tradiciones intelectuales españolas han solido coincidir en cierto pesimismo histórico acerca de las posibilidades de la sociedad para regenerarse, para superar sus hábitos y valores más negativos. La innovación se ha visto con demasiada frecuencia como una práctica más propia de gentes foráneas. Y ello ha producido una actitud ambivalente: el misonéismo que desdeña la modernización por ser radicalmente no española, o el progresismo importado. Y de hecho, se ha tratado de una profecía que se autocumple: la Modernidad, cuando ha llegado, se ha debido primariamente a un proceso de *aculturación*. Ha sido la progresiva apertura del país al extranjero, primero en la economía y luego en sus formas de vida, lo que ha acabado de manera definitiva con el tópico de "España es diferente".

Una vez situados en la senda de la modernización, como si se quisiera recuperar el tiempo perdido, o quizá con la fe del recién converso, la sociedad española ha pretendido ser más moderna que ninguna. En poquísimos años, España ha encarnado fielmente el espíritu de la Modernidad, entregándose por completo a la *vorágine del cambio* (Berman, 1988). El cambio era no sólo un eslogan de campaña electoral al que han recurrido todas las diversas opciones políticas (ahora también las más conservadoras) sino una creencia compartida por toda la sociedad. La década de los años ochenta venía a ser la del *sorpasso español*; avanzábamos más que nadie y, además, batíamos sin cesar nuestros propios récords. Teníamos la Constitución más progresista de Europa; la economía en la que era posible enriquecerse más y antes; los jóvenes más europeístas de todos; la clase política más joven y audaz, y hasta empezábamos a desbancar de sus puestos privilegiados a los países con economías más fuertes y consolidadas. Cinco siglos después de uno de los acontecimientos que marcaron el comienzo de la Edad Moderna protagonizado por españoles, volvíamos a deslumbrar al mundo: los fastos del 92, con la Expo, las Olimpiadas, el AVE nos hacían ser, una vez más, adelantados de los tiempos.

Corríamos el riesgo, en expresión de uno de los políticos más emblemáticos de esta época, de “morir de éxito”. Más con la discontinuidad que nos caracteriza, pronto volvió una “época de hierro”, de reajustes y síntomas de que no es Modernidad todo lo que reluce. De las alabanzas del éxito pasamos, sin transición alguna, a las jeremiadas de la recesión. Parecíamos volver a la miseria después de haber salido de la nada. Como si nuestro progreso tan sólo hubiera consistido en unos fuegos fatuos. Y aunque hay problemas importantes, la realidad no es tan negativa como parece. De igual manera que antes tan poco lo era tan positiva.

El despertar de una ilusión

El tiempo regulador del conocimiento en nuestra vida social ha estado por lo general presidido por la mirada retrospectiva. La nostalgia y el recuerdo de épocas más plenas y felices eran un pesado lastre para cualquier empeño innovador. Esos tiempos pretéritos, reconstruidos *ad hoc* en cada caso, servían de legitimación de un presente plagado de carencias y bloqueaban los proyectos del cambio social. Una densa

tradicción española, elaborada precisamente como reacción contra la Ilustración, se impondrá largo tiempo a cualquier otra opción renovadora. Bajo el imperio de la misma, el presente era un mero accidente, que a su debido tiempo se superaría, y el futuro estribaba en la plena actualización y reconocimiento de las glorias pasadas. Ésta era la esencia del pensamiento reaccionario español, y a ella respondían los correspondientes diseños políticos conservadores. Se vivía, por tanto, en un clima de *ilusión retrospectiva*, que perseguía neutralizar movimientos y fórmulas que pretendiesen encarar el presente y el futuro como oportunidades para construir una nueva realidad. De ahí la fuerte implantación en nuestra cultura de rasgos tales como la *ensoñación* y el *ensimismamiento*, incapaces ambos de afrontar el mundo tal como es. Quizá los dos momentos más expresivos de esta cualidad cultural lo sean la novela picaresca y la generación del 98, si bien podemos encontrar otros muchos ejemplos de rango menor, bastante cercanos a nuestros días, en las disputas posteriores a la Guerra Civil. E incluso, si se me apura, algo de ello subyacía en la retórica de la campaña electoral del 93. El tiempo, que parecía haberse detenido, aprisionaba a la sociedad en un molde rígido que la hacía ser un antigualla, interesante sólo para antropólogos y aventurados viajeros a países exóticos.

Mas en uno de esos giros radicales y rápidos que también nos caracteriza, hemos dejado de ser sólo pasado, a no tenerlo. A partir de la década de los años sesenta, en la que se inicia el desarrollo económico y sus efectos sobre la estructura social, los españoles han ido recubriendo con un tupido velo su historia anterior. Un modelo, el de la pérdida de la memoria colectiva, que se consagraría en la transición democrática (Morán, 1991). El pasado comenzó a olvidarse y el futuro se erigió en la referencia temporal dominante. Este fenómeno comienza a manifestarse, además, bajo la égida de un régimen político, el franquismo, absolutamente identificado con la visión reaccionaria del pasado. De manera que también ahora la modernización emprendida afectaba de forma muy desigual a la organización de la sociedad, provocando nuevos desequilibrios y desajustes de no fácil solución posterior. Por estas peculiaridades, el cambio social se desarrolla bastante en el vacío. En primer lugar, porque arremete inmisericorde contra todo lo anterior, sin ningún criterio para conservar lo valioso y eliminar lo negativo. En segundo lugar, porque las nuevas adquisiciones no se consolidan, ya que no vienen a enlazar con ningún elemento precedente, de modo que el impulso es a seguir

suprimiendo un logro tras otro. De la aversión a lo nuevo se pasa al rechazo de cuanto suponga continuidad. Otra vez, el cambio por el cambio. Creencia, por lo demás, de gran eficacia ideológica, tanto en el franquismo como en la posterior democracia.

El presente se convierte así en un tiempo extraordinariamente destructivo, que como Saturno devora a sus hijos. Despertada el ansia por la novedad, nada es capaz de satisfacerla. Expectativa tras expectativa, sin apenas tiempo para saborear su consecución, va siendo pulverizada. Esto lleva a la insatisfacción con que se percibe la vida cotidiana. Por más logros que se alcancen, y ciertamente son muchos los obtenidos en poco tiempo en nuestra sociedad, en ninguno de ellos se encontrarán compensaciones suficientes como para detenerse un tiempo en su disfrute. Con estas actitudes, resulta difícil dar cuerpo y asentar bajo bases sólidas la nueva sociedad. Lo que resulta más sencillo es continuar deshaciendo lo ya hecho. Con el síndrome de los nuevos ricos, los españoles, ilusionados por ese espíritu de la Modernidad en el que se ofrece un futuro plagado de excitantes esperanzas, van recorriéndolas todas sin saciarse en ninguna de ellas. Pero al hacerlo, van también rebajándolas en sus cualidades, si es que no despreciándolas. Este resultado es particularmente verificable en los servicios públicos, pero no sólo en ellos. Es igualmente detectable en la mayor parte de las formas de vida y comportamientos sociales: en la vivienda, la alimentación, la diversión y las relaciones sociales. Esta tensión no contenida por quemar etapas sin detenerse en ninguna de ellas, produce otra reacción bien típica: el *estar de vuelta antes de haber llegado*. Los españoles de los últimos tiempos parecemos dar la impresión de conocerlo todo, haberlo experimentado todo, estar hastiados de todo.

Nos hemos vuelto escépticos, cualidad que no está nada mal si la comparamos con los fundamentalismos e intransigencias de otras épocas. Pero también pesimistas, porque hemos recorrido un largo trecho en poco tiempo, y comenzamos a despertar de otra ilusión: la de que rompiendo con el pasado seríamos plenamente modernos. Y acceder a la condición de tales se ha mostrado no todo lo gratificante que el mito prometía. Con lo que se ha instalado en la conciencia colectiva una crisis del presente de hondo calado y difícil superación: ya que si el futuro sigue proporcionando la misma oferta de expectativas que hasta ahora, su acceso a ellas decepciona; y si no lo hace, como ha empezado a suceder, porque no hay posibilidad siquiera para decepcionarse.

Ahora bien, una sociedad que se olvida de su historia (es sintomático el escaso valor y peso que a la misma se concede en los diversos niveles de la enseñanza) está condenado a repetirla, esperemos que esta vez como farsa. La historia está, por supuesto, no para ser repetida, sino para sacar de ella experiencias significativas con las que afrontar los tiempos que se viven. Pero si se desconoce el pasado, podemos correr el riesgo de reproducir los errores o de no enmendarlos. Ciertamente para la sociedad española resultaba ser necesaria esta catarsis de pasado capaz de liberarla de sus demonios familiares, pero a condición de no ignorarlos para impedir que se le cuelen por la puerta de atrás. No se trata de revanchas y vendettas que a nada conducen, sino simplemente de conocer la innegable continuidad que hay entre ese pasado ominoso que se suele demostrar y el exclusivo presente. Bien está que, por ejemplo, la transición democrática se hiciera prescindiendo de exigir responsabilidades políticas por el pasado (había que superar el clima de la contienda civil), pero ello no supone que se silencien las prolongaciones en el nuevo régimen de los grupos e intereses del viejo, ni que se elimine de un plumazo cuanto fue el pasado. Porque al hacerlo, se deja a la sociedad sin criterios con los que discriminar el sentido de los diversos proyectos y alternativas que se le ofrecen. Lo que lleva a que la democracia se considere la continuación sin más del franquismo, o a que baste con criticar ferozmente al poder (democráticamente constituido) para aparecer, a pesar de la antidemocrática trayectoria anterior y los poco claros compromisos del presente, como un incuestionable paladín de la libertad y del progreso. Instalados en un presente deprimido, con un futuro plagado de incertidumbres y lados sombríos (Gil Calvo, 1993) rotos los vínculos con el pasado, volvemos a despertar de un sueño para abruptamente caer en una realidad que no sabemos muy bien cuál es y, lo que es más preocupante, a dónde nos conduce.

Una sociedad fragmentada

En virtud de los procesos descritos, la rigidez estructural que caracterizaba a la sociedad española ha desaparecido en gran medida, al mismo tiempo que lo hacían o se debilitaban las instituciones que secularmente la habían mantenido encorsetada bajo la definición de un orden tradicional. Este orden, o bien se ha destruido (así, las formas rurales de vida) o

si se conserva lo hace como una reliquia folklórica del pasado convertida en espectáculo de masas (así la mayoría de las denominadas "fiestas populares"). El último vestigio de tal orden, la dictadura franquista, desaparece con la muerte de su fundador.

Desembarazada de las ataduras del pasado, la sociedad entra en una etapa con una muy débil organización interna. El viejo orden ya no sirve, el nuevo está por llegar. Se inicia así un proceso de *reconstrucción social*, que no ha concluido y que está por ver en que dirección se mueve. Por de pronto, una sociedad que no ha tenido tiempo para consolidar las rápidas transformaciones que ha sufrido, se encuentra en precario equilibrio interno. Lo cual le dota de escasa autonomía e inestabilidad. Es decir, la vuelve propicia a movimientos pendulares, en los que no es infrecuente encontrarnos con el retorno, aunque sea con otros ropajes, de instituciones y formas de vida que parecían definitivamente periclitadas.

Los grandes procesos de reconstrucción iniciados afectan a tres ámbitos esenciales de la Modernidad: el Estado, el mercado y la sociedad civil. El Estado Moderno apenas si ha existido en nuestra sociedad. Ha habido, por supuesto, una maquinaria destinada a la represión, así como a salvaguardar los privilegios económicos de una secular minoría endogámica. Pero el Estado como aparato burocrático capaz de propiciar la racionalidad específica de la Modernidad, así como posibilitador de la representación y legitimidad democráticas, es una conquista reciente. Por tal razón, la sociedad se ha mostrado por lo general recelosa hacia esta institución, monopolio casi exclusivo de las clases poderosas, que lo convertían en coto particular. Esta *patrimonialización* de la vida pública hacía difícil la renovación de la clase política, que tan sólo entendía de intereses particulares. De este modo, la política, entendida como tarea reservada a una minoría desvinculada del resto de la sociedad, a la que por lo mismo no tenía que dar cuenta de sus actos, se representaba en la mentalidad colectiva como un ámbito desacreditado. Todo el mundo presumía ser, incluido el anterior jefe del Estado, apolítico. Esta desafección a lo político venía a ser un modo de reducir la disonancia producida por un ámbito tan importante y reservado a tan pocos.

De manera que con la llegada de la democracia, era necesario modificar no sólo las instituciones políticas, sino también las convicciones sobre ellas. Hubo, en definitiva, que legitimar la nueva forma de dominación, tratando de alejarla todo lo posible del halo contaminador del

viejo régimen. La reorganización del Estado se llevó a cabo en dos frentes complementarios. De un lado, cambiando la representatividad del mismo y ampliando notablemente la participación social en sus instituciones. Para ello se configuró una *nueva clase política*, más amplia que la anterior y con una presencia muy destacada en ella de las clases medias aspirativas (Ortega, 1993). De otro, se construyeron las bases del Estado de bienestar, capaz de propiciar crecimiento económico y redistribución de las rentas. En virtud de esta última reordenación, la confianza del ciudadano en el Estado creció hasta el punto de cifrar en él la mayor parte de las posibilidades para la resolución de cualquier problema (Ortega, 1990, caps. I y II). En realidad, pasamos de ser una sociedad sin apenas derechos (sólo había concesiones gratuitas del soberano), a tenerlos o querer tenerlos todos sin restricción alguna. Junto a los derechos jurídicos y formales, también los económicos y materiales se perciben como incondicionados. Los españoles de la democracia se consideran, respecto del Estado, como beneficiarios que lo esperan todo de él sin contrapartida alguna por su parte. De ahí las fuertes resistencias fiscales surgidas en nuestra sociedad, particularmente en aquellos estratos con más altos ingresos y más dados a quejarse de lo poco que reciben a cambio de lo que dan.

Ahora bien, prontamente, en apenas una década, algunos de los elementos de este edificio recién construido están sometidos a un fuerte proceso de erosión. En general, debido a que la democracia es un sistema político en el que la euforia dura poco: tan sólo en sus comienzos; después no suscita fuertes reacciones pasionales. A diferencia de los autoritarismos y teocratismos de toda condición, que están movilizando a las masas continuamente, la racionalidad democrática se basa en ritos y mecanismos de bajo contenido pulsional. Pero junto a este rasgo común a todas las democracias, que también hemos experimentado prontamente, aparecen otros capaces de propiciar reatramiento, cuando no desafección, hacia ella. Así, la nueva clase política, asentada en las diversas instancias de poder, tiene cierta inclinación a patrimonializarlo, aprovechando de forma monopolista las oportunidades y privilegios que ofrece. La indudable contestación social a la clase política está provocando una importante deslegitimación a la representatividad democrática. Pero es que también la fórmula del estado del bienestar, apenas inaugurada, ha entrado en crisis. La recesión económica, el abultado déficit público y el deterioro que se produce en los servicios gratuitos por parte

de unos usuarios bisoños, están privando al Estado de otras de sus fuentes de justificación. En especial porque es en épocas de crisis cuando mayor es la presión sobre el Estado por parte de todos los estratos sociales para que intervenga resolutivamente en sus problemas; época en la que precisamente se ve constreñido a limitar el ámbito y la cuantía de su actuación.

El periodo de crecimiento del estado del bienestar coincide con un importante despegue de la economía. Pero ¿qué tipo de economía? A lo largo del franquismo, se pasa desordenadamente de una economía agraria a otra más industrial y de servicios. Dirigido por una clase que en muchas ocasiones era la misma del Estado, el aparato económico sufría de sus mismos defectos: falta de competitividad, régimen de monopolio, intervención del Estado sobre todo para enjugar pérdidas (la conocida fórmula de la subsidiaridad del Estado). En definitiva, ausencia de empresarios dotados de la racionalidad típica del capitalismo. En el franquismo había sobre todo capitalistas aventureros cuya exclusiva actividad era la especulación. La consolidación de la democracia no cambia demasiado el *ethos* del capitalismo español, que sigue dando muestras de preferir la especulación sobre la inversión productiva. No son precisamente los sectores productivos los que crecen; antes al contrario, o se dismantelan o se venden a grupos extranjeros. Los capitalistas españoles, los prototipos más genuinos de la década de los ochenta, siguen siendo los especuladores, especialmente inmobiliarios y financieros. Pero no son los únicos, ya que han sido reforzados por la aparición de un grupo profesional (igualmente especulador) que se suponía encarnaba mejor que ningún otro el espíritu de los tiempos modernos: los *yuppies*. Un orden tan poco racional como éste, sin embargo, pretende erigirse en marco de referencia social, y lo consigue. Sus "virtudes", esto es, la falta de atributos y competencia, son las que se difunden a través del tejido social. Sus protagonistas, "tiburones" de la especulación, son los héroes de la moderna farsa. Todos ellos reclaman que el resto de la sociedad se subordine a sus intereses y necesidades. Y sin duda algo han conseguido, por lo menos que el mundo de la comunicación de masas y parte del sistema de enseñanza (sobre todo la Universidad) asuman como propias las definiciones de realidad que provienen de tan veleidoso e irracional orden de cosas. El problema radica en que una sociedad como la española, que de manera tardía y no sin continuas deslegitimaciones ha incorporado el modo de producción

capitalista, lo ha hecho en muchos casos bajo las modalidades más perversas. De este modo, la cultura empresarial apenas está difundida entre quienes, paradójicamente, suelen dedicarse a actividades empresariales en nuestro país. Y sin ella, difícilmente hay prosperidad sostenida y menos aún recursos para hacer frente a la crisis.

Inserta en estas coordenadas, la sociedad civil no puede por menos que disponer de una estructura débil. Con el paso del tradicionalismo a la modernidad, los grupos y organizaciones intermedios, la comunidad, se debilitaron o se extinguieron. Las emergentes formas de sociedad civil presentes en los finales del franquismo, son absorbidas por los partidos políticos en el momento de la transición. En la década de los ochenta, la sociedad se polariza en torno a dos núcleos: el mundo de las grandes organizaciones económicas (corporaciones) y el de los grupos neocorporativistas con capacidad para establecer pactos con el gobierno, tales como sindicatos y empresarios, firmes defensores del cierre excluyente en defensa de los intereses de sus patrocinados. Fuera de ellos queda exclusivamente la vida privada individual, que desplaza a las acciones colectivas de otra época.

El descrédito de la política corre parejo con el enlazamiento del mundo de la subjetividad. Así, organizaciones y grupos neocorporativistas, en convivencia con el Estado, son los únicos que intervienen en el espacio público, que se convierte en ámbito para la defensa de sus intereses. De nuevo la política es presentada como práctica que conviene evitar, ya que sólo conduce a la corrupción. Mientras, el individuo, enclaustrado en su reino del consumo, renuncia a alzar la voz y *sale* de la vida pública. El conflicto aparece cuando coinciden la degradación de lo público con las restricciones al consumo privado: el ciudadano se siente entonces doblemente impotente, y tiende a volverse contra cuantos actúan en la esfera pública. No se da en este caso un nuevo retorno a la vida pública (tal y como sostiene Hirschman, 1986) sino la más absoluta deslegitimación de la misma y la descalificación de quien decide abandonar la privacidad para actuar en la política.

Estas convicciones esparcidas en la sociedad, sobre todo por los medios de comunicación, son uno de los riesgos más peligrosos que afectan hoy a la democracia. Por que con tales representaciones de lo político, nada podría hacerse para su regeneración. O, como mucho, que es la modalidad que por ahora aparece entre nosotros, prestar una confianza enfática a formas atenuadas de liderazgo político de corte

carismático. Este individuo aislado y receloso de la democracia representativa, que se aleja de las instituciones establecidas, tampoco confía en sus propias posibilidades ni en las de otros para afrontar la situación. Por tal razón es igualmente incapaz de cooperar solidariamente en otras formas de acción social, tales como movimientos y grupos intermedios. En la conciencia colectiva se instala la tesis de la futilidad: hágase lo que se haga en el espacio público, todo seguirá igual (de mal o de corrupto). Mientras esta actitud sea compatible con el mantenimiento del reiterativo ciclo consumo-decepción-consumo, tan sólo producirá apatía y desvertebración social. Pero si el ciclo peligra, los riesgos de descomposición son ciertos, ya que entonces el sujeto individual puede acabar siendo seducido por alguna forma de demagogia populista.

Hijos de dioses menores

Probablemente es en el orden cultural donde se han dado mayores transformaciones, haciendo que en él cunda el desconcierto y la perplejidad. Y es que la impronta tradicional y religiosa de la sociedad española, que ha sido duradera e influyente hasta muy recientemente, se ha derrumbado abruptamente como consecuencia de un rápido e intenso proceso de secularización, en el que han sucumbido no sólo las creencias religiosas, sino muy principalmente las formas culturales tradicionales de origen no religioso. La década de los sesenta es un período caracterizado por una fuerte y eficaz aculturación, que va despojando a esta sociedad de hábitos hasta entonces considerados como incuestionables. Estas formas eran, además, mucho más sólidas que las religiosas (en la católica España, conviene no olvidarlo, siempre fueron necesarias las misiones recristianizadoras) y mantenían una coherente definición del orden social. Se entra así en una fase de cierta anemia social, propia de una sociedad que aunque formalmente mantiene los patrones culturales del pasado, ya no se rige por ellos, y todavía no ha conseguido otros capaces de reemplazarlos de modo satisfactorio.

Parte del espacio dejado libre por el declive religioso y tradicionalista tendría que haber sido ocupado por otro tipo de cultura, más racionalista y secular. Esta era, sin duda, una de las tareas que correspondía asumir a la cultura escolar. También en este aspecto, la velocidad del cambio ha sido vertiginosa. Hemos pasado, en pocos lustros, de ser un

país con una alta tasa de analfabetismo y un sistema escolar raquítico, a disponer de unas redes escolares cuantitativamente numerosas y a unas demandas de educación formal crecientes que han llevado a que las tasas de escolarización en todos los niveles sean considerablemente altas. Ahora bien, ¿significa esto que la escuela ha generalizado en la sociedad conocimientos racionales y actitudes propias de una sociedad moderna? Me permito dudar. Y ello por una razón básica que afecta a los supuestos con los que entre nosotros se ha emprendido la reforma expansiva del aparato escolar. Este no se ha ofrecido principalmente como un ámbito que propicia la creación y transmisión de conocimientos racionales, sino como un *medio instrumental* para conseguir puestos de trabajos mejor remunerados. Por tanto, se ha “vendido” la educación formal bajo un único aspecto, el de su contribución a la movilidad social. Tal perspectiva soslayaba el sentido e interés de cuanto se hacía dentro de ella; lo importante es lo que se hacía después y fuera de ella con los títulos que proporcionaba. De este modo, la presión sobre el sistema escolar ha sido desmedida, y sobre todo se ha dirigido a devaluar sus contenidos, a hacerlos irrelevantes, ya que no eran ellos el objeto principal de la demanda escolar ni tampoco de las sucesivas reformas llevadas a cabo por las diversas políticas educativas. Pero, al no darse la correspondencia esperada entre títulos y mercado de trabajo, la reacción ha sido desconfiar del sistema escolar, proyectar sobre él los conflictos de la economía y desprestigiar un poco más a sus actores. En tales circunstancias, no parece excesivo afirmar que la aportación de la cultura escolar a la configuración de un nuevo orden normativo resulta ser poco relevante.

Pero lo que la cultura escolar no da, sí ha sido capaz de prestarlo la cultura de masas. Así, mientras el fracaso de la escuela es notorio, la influencia con éxito de la comunicación de masas no hace sino crecer. De modo muy especial, la comunicación audiovisual. En efecto, la sociedad española ha pasado, apenas sin transición, de la cultura oral tradicional a la cultura visual de los *mass media*. De las cosas oídas hemos dado el salto a las cosas vistas, sin que las cosas leídas hayan jugado nunca un papel destacado. Apenas ha habido una etapa intermedia de cultura lectora. Seguimos siendo uno de los países con menores índices de lectura, de libros y de prensa escrita. Pero somos ávidos devoradores de radio y televisión. Y con su imperio lo que ha llegado es un tipo de cultura que no contribuye precisamente a proporcionar a la sociedad claves racionales para organizarse coherentemente. Antes al

contrario, las creencias que difunde consisten en sostener que todo es opinión, y como tal no hay necesidad de demostrar racionalmente ni de construir argumentos sólidos en ningún campo. Todo vale, con tal de decirlo convincentemente, parece ser el lema. No importa lo que se dice; lo único importante es *cómo se dice*. El errático mundo de la opinión empieza a convertirse en la última razón de la sinrazón. En este mundo del espectáculo audiovisual el que facilita los nuevos dioses, los dios-cillos, de la cultura de masas, los triunfadores de la trivialidad a toda costa.

Es lógico que en este clima resulte un objetivo algo fútil crear y exigir una *moral cívica* capaz de regular las relaciones sociales. El espacio público, por lo pronto, sufre un deterioro profundo. En parte por cuanto expusimos acerca de la deslegitimación de la clase política. Pero como consecuencia también del tipo de valores difundidos sistemáticamente por los *mass media*. A lo largo de la década de los ochenta y en los comienzos de los noventa, estos medios se han erigido en *moralizadores* de la sociedad. De su influencia dan muestras las actitudes de los jóvenes, socializados en el clima cultural por ellos difundido. Los jóvenes se perciben a sí mismos como moralistas, con inclinación a la intolerancia y a la intransigencia (Cires, 1993). Y digo bien moralistas y no críticos. La crítica requiere reglas y modos de hacer profesionales; la moralización no. Basta, para ella, con pontificar sobre todo, sin demostrar nada. Bajo su orientación, lo que se aporta al debate público no son razones y discursos reflexivos, sino justificaciones y descalificaciones emocionales. Resurge así, al socaire de una pretendida Modernidad, un rancio ideologismo, en el que participan por igual restos del naufragio religioso y del marxismo. Adoptando el supuesto de que vivimos en un mundo corrupto y sin remedio (ya se sabe, la salvación no es de este mundo: el paraíso o el reino de la libertad se encuentran fuera de él), estos profetas proclaman, como señala Sartori (1993, p. 57) "el *derecho* a no tener razón y a pisotear la razón". Y si nada ni nadie del espacio público pueden ser racionales, es necesario descalificar permanentemente a quienes actúan en él.

Pero cuando esto acontece en el espacio público, tampoco la vida privada es propicia para el florecimiento de la racionalidad ni de la virtud. De hecho, en la comunicación de masas hay un claro interés en no establecer solución de continuidad entre ambas dimensiones. De manera que público y privado se muestran como un continuo en lo que concierne

a su naturaleza última impregnada de intereses y pasiones inconfesables. Y puesto que todo ello se presenta sin crítica racional, sino simplemente como un estado de cosas del que todos participan, no se invita precisamente a superarlo, sino a imitarlo. No hay, no puede haber, en tal contexto lugar para principios racionales ni valores morales universales. Tan sólo existen las más variadas formas de particularismo, en las que todos los medios susceptibles de ser utilizados para el dominio y el éxito resultan igualmente válidos y lícitos con tal de que sean eficaces. Proliferación, en suma, del familiarismo amoral, que fragmenta la sociedad en grupos exclusivamente de intereses. Con lo que estaríamos llegando, peligrosamente, a una sociedad no sólo sin ideas sino también sin ideales. Al estar irremisiblemente perdido lo público, puede ser visto como un ámbito para la exigencia de derechos o, si es posible, para su expolio. Los deberes, si los hay, no se cumplen. Las responsabilidades, si no se asumen, no se exigen. Pero sí, inveterados peticionarios de derechos y conculcadores de responsabilidades son quienes más alto y más irracionalmente claman por una virtud pública rebajada, que ellos mismos contribuyen eficazmente a degradar. Son los dignos continuadores de esa doble moral (primero católica, después de una sedicente izquierda revolucionaria capaz tan sólo de la crítica ideológica estereotipada) que tan negativamente ha incidido sobre la sociedad española, al bloquear la aparición en ella de un código basado en el libre pensamiento.

Avanzar sí, desmitificar también

El paso de una sociedad tradicional a otra moderna no es un proceso ni fácil ni rápido. Los costes son elevados y la configuración de un nuevo orden exige proyectos racionales y coherentes. No puede negarse que la sociedad española ha abandonado algunos, no todos, de sus seculares modos de vida, caracterizados por un tradicionalismo (no siempre voluntariamente querido y asumido) radical. Pero tampoco que no ha alcanzado una estructura plenamente moderna. Existe entre nosotros, precisamente por esta situación de naufragos entre dos puertos igualmente poco conocidos, un estado mental de incertidumbre, que nos lleva a considerarnos en términos individuales muy avanzados, pero bastante más escépticos, si no desesperanzados, cuando se trata de nuestras posibilidades como sociedad. El español de hoy día da la impresión de

no vivir en su sociedad: de ésta predica toda suerte de disfunciones y vicios; pero sin reconocer que alguna parte de responsabilidad ha de tener él en tal estado de cosas. Es un síntoma, uno más, de una modernización mal digerida, en la que hallamos presente la actitud tan tradicionalmente española de confiar escasamente en la acción colectiva para resolver los problemas.

Mas a pesar de la crisis del momento presente, la sociedad española ha dado el mayor e irreversible impulso modernizador de toda su historia. Para que no se malogre y pueda acrecentarse; para que abandonemos los mitos tanto del pasado cuanto del futuro, conviene, no obstante, que se adopten actitudes más realistas y también que se disponga de elementos más racionales para entender esa realidad. Especialmente para evitar estar continuamente tejiendo y destejiendo nuestra historia, lo que suele suceder cuando ésta se desconoce o se vive en el marasmo de una sociedad a la deriva, bien por falta de un proyecto, bien por que éste sea absolutamente fantasmagórico.

De conformidad con cuanto he planteado en los apartados precedentes, seis son a mi juicio los requisitos para que la sociedad alcance una organización mínimamente coherente:

1. Asumir el pasado, lo que implica conocerlo. Sólo con tal condición será posible no repetir los mismos errores, así como calibrar lo conseguido y valorar las distancias entre el antes y el ahora.

2. No confundir los problemas, que siempre habrá, con los fracasos y las frustraciones globales. Ni todo se consigue una vez, ni todo tiene por qué perderse de golpe. Los problemas son solucionables por vías racionales; las frustraciones sólo conducen a la apatía y a la búsqueda de compensaciones irracionales. Se requiere comprender que cuanto le acontece al individuo y a la sociedad no obedecen a los inescrutables designios de la suerte o del fatalismo, sino sobre todo a lo que son capaces de realizar los seres humanos de acuerdo con la capacidad y posibilidad de actuar inteligentemente.

3. Organizar la sociedad de modo que en ella surjan y se fortalezcan asociaciones y grupos intermedios autónomos, pero no sólo del Estado, sino también de las corporaciones económicas. Esta organización permitirá difundir más la cooperación solidaria, así como hacer más resistente la sociedad frente a los conflictos y las oscilaciones que puedan darse en la política y en la economía.

4. Revitalizar la democracia política es una exigencia en una sociedad que tan poco ha disfrutado de ella. Pero una democracia representativa, que es la que, con todos sus defectos, ha sido hasta la actualidad la única *real*. En cualquier caso, es necesario ser críticos con la denominada “democracia electrónica”: una vez más estaríamos ante una modalidad política que hurta a los ciudadanos su capacidad decisoria en favor de los oligopolios de la comunicación.

5. Fomentar el mercado y la competitividad es igualmente deseable, en un país de economías protegidas. Para ello ha de crearse una clase empresarial capaz de invertir en actividades productivas, restringiendo, si es que no resulta posible eliminar, la actividad de los especuladores. Al menos, que a estos últimos no se les proponga como modelos sociales. Pero que el mercado desempeñe este papel no puede significar que el Estado renuncie a su actividad redistributiva de las riquezas. Debe evitar la agudización de las desigualdades, sin por ello favorecer la dependencia social del Estado, que generaría un exceso de grupos sociales subsidiados, que si por un lado propician parasitismo social y exclusivas expectativas de derechos incondicionados, por el otro pondrían en peligro la viabilidad del Estado del bienestar. Pero no menos conveniente es también que los sindicatos dejen de ser plataformas solamente reivindicativas de intereses corporativos, y se planteen igualmente fomentar la profesionalidad y la productividad.

6. Propiciar una nueva cultura. En realidad, los puntos anteriores se sitúan casi todos ellos en la esfera de la cultura, ya que ésta, en cuanto sistema normativo que dirige la conducta, resulta imprescindible para cualquier innovación social que pretenda tener efectos duraderos en la estructura social. Una cultura que se desprenda de su moralismo misticador: en el pasado lo fue por su vinculación a las creencias religiosas; después siguió siéndolo por su dependencia de las ideologías y los intelectuales de la izquierda; por último hoy a venido a serlo por la influencia que en ella ejercen los nuevos intelectuales de la izquierda; los medios de comunicación, sobremoralizados en sus contenidos, esto es, redundantes de opiniones calificadoras o descalificadoras. Ha de tratarse, por tanto, de una cultura realmente racional, en la que converjan tres tipos de racionalidades consustanciales con las sociedades modernas: la de la democracia política, la de la economía de mercado y la científica. La amalgama resultante ha de dotar a la sociedad de una nueva moral pública. Para conseguirlo, resulta indispensable sacar de la crisis en que

se halla al sistema educativo, revitalizando sus contenidos. Pero no menos necesario es racionalizar el mundo de la comunicación de masas, profesionalizando a cuantos se mueven dentro de ella. Lo cual exige superar la actual fase de predominio de la opinión, el reino donde todo vale, para acceder a modos de ejercer las funciones comunicativas de conformidad con la crítica y la discusión racionales (Ortega, 1992). Quizá resulte insoslayable para ello que en este ámbito tenga lugar una transición profesional y cultural.

Bibliografía

- Berman, M. (1988), *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Madrid, Siglo XXI.
- Cires (1993), *La realidad social de España*, Madrid.
- Gil Calvo, E. (1993), *Futuro incierto*, Barcelona, Anagrama.
- Hirschman, A.O. (1986), *Interés privado y acción pública*, México, FCE.
- (1991), *Retóricas de la intransigencia*, México, FCE.
- Moran, G. (1991), *El precio de la transición*, Barcelona, Planeta.
- Ortega, F. (1990), *Las contradicciones sociales de la modernización*, Madrid, Edersa.
- (1992), “Los nuevos intelectuales orgánicos”, en *Claves*, núm. 24.
- (1993), “Del patrimonialismo a la competitividad”, en *Política y Sociedad*, núm. 13 (en prensa).
- Sartori, G. (1993), *La democracia después del comunismo*, Madrid, Alianza.